



LA MASACRE DEL 19: ARMADOS CON MOTIVACIÓN POLÍTICA O CRIMEN ORGANIZADO

Desde hace ya unos años, el obispo Abelardo Mata de la diócesis de Estelí, ha tratado de llamar la atención gubernamental y de la ciudadanía, afirmando que existen, en el área rural del norte del país, grupos armados con motivaciones políticas. En efecto, en poblaciones de esa zona, desde hace un tiempo se habla de la existencia y movilización de fuerzas irregulares que utilizan vestimenta militar y portan armas de guerra. La Policía, el Ejército y funcionarios de otras instituciones gubernamentales han negado repetidamente que existan tales grupos, aseverando que son bandas delincuenciales.

En algunos municipios del norte, los pobladores afirman que algunos de estos grupos de civiles armados están vinculados al gobierno y que se mueven como fuerzas auxiliares de la Policía o el Ejército. Lo cierto es que en la zona rural de los departamentos del norte del país y en los municipios centrales de la RAAN, ha habido un enfrentamiento “no oficial” con grupos armados que alegan poseer motivaciones políticas. Desde el 2012 a la fecha, esos grupos han ejecutado acciones de ataque a objetivos policiales, realizado emboscadas a patrullas del Ejército y asesinado a secretarios políticos locales

del Frente Sandinista. También se ha conocido de diversos enfrentamientos entre fuerzas del Ejército y policiales con esos grupos.

Desde mediados del 2013, se efectuaron combates entre patrullas del Ejército y el grupo de “El Flaco”. Todavía a finales del año, se mantenían esas operaciones. Alberto Midence, “El Flaco” quien decía pertenecer al “Comando Patriótico Nicaragüense” (Copan), fue ejecutado en una calle en la ciudad de El Paraíso en Honduras en diciembre de ese año. En 2012, también había sido asesinado en Honduras, Santos Joyas Borge, “Pablo Negro” quien se ubicaba como uno de los jefes de las “Fuerzas Democráticas “Comandante 380”.

En este año, pobladores de comunidades del territorio mayangna Sauni Bu, reportaron un grupo de unos cincuenta armados que llegaron a algunas comunidades, buscando información o localización de secretarios políticos del FSLN. Un enfrentamiento en marzo, en el sector conocido como La Ayotera, en la cuenca del río Coco en el departamento de Jinotega, admitido por el Ejército, se realizó entre estas fuerzas y un grupo comandado por una persona conocida como “Alexis”.

Hasta el 17 de julio recién pasado, los movimientos de estos grupos armados se ubicaban en zonas montañosas. Ese día, se conoció la toma de un tramo de la carretera panamericana, a las alturas del km 215, cerca del poblado de Totogalpa, a escasos siete kilómetros de la ciudad de Ocotal. Durante el operativo se hicieron pintas en un bus aludiendo al Comando 380, se efectuaron disparos contra un vehículo gubernamental y no se registró ningún robo. La Policía afirmó que se trataba de un robo frustrado de la banda del “Térro” contra un importante productor de la zona, pero la Coordinadora Guerrillera Nicaragüense, una entidad con presencia en las redes sociales, reivindicó la acción como propia, a la vez que afirmaba que en la zona norte se realizaban detenciones injustificadas y represión por parte del gobierno.

En la noche del 19 de julio, cuando regresaban los primeros vehículos procedentes de Managua de la celebración oficialista, cerca del sitio conocido como



Obispo Abelardo Mata.

Puertas Viejas en la carretera panamericana norte, a unos 75 kilómetros de Managua, un grupo desconocido realizó disparos contra uno de los buses causando la muerte a cuatro personas y heridas a casi una veintena de personas. De acuerdo a la Policía, esa unidad de transporte era la única que carecía de custodia policial. Esa misma noche, otro grupo realizó disparos contra otro de los vehículos que transportaba simpatizantes del FSLN, esta vez en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa, causando la muerte de un joven. Ambos actos criminales generaron un rechazo unánime de todos los sectores políticos y sociales del país.

La Policía Nacional, en la voz de sus mandos principales, anunció que se trataba de dos grupos criminales distintos, procediendo a realizar las primeras detenciones de un grupo de personas integrantes del FSLN y posteriormente el allanamiento de viviendas y la captura de una familia de reconocidos opositores liberales, todos del municipio de Ciudad Darío.

A diferencia del operativo de propaganda armada del 17 de julio, la “Coordinadora Guerrillera Nicaragüense” tomó distancia del hecho. Las acciones del 19 fueron reivindicadas inicialmente por quienes se autodenominan “Fuerzas Armadas de Salvación Nacional-Ejército del Pueblo (FASN-DP)” y que poseían una página

y un perfil de Facebook, la primera de las cuales fue cerrada luego que fuese inundada de críticas de todo tipo. En el perfil se retiró toda alusión a los ametrallamientos de civiles. Ese FASN-DP pareciera, más bien, ser una fachada creada por organismos de inteligencia para ubicar a presuntos interesados en la lucha armada. Ninguno de los otros grupos armados que afirman tener motivaciones políticas se ha hecho acreedor de las acciones de Puertas Viejas y San Ramón.

Ciertamente, esas acciones se diferencian con las realizadas por los grupos armados que alegan tener motivaciones políticas, quienes no han ejecutado ningún ataque masivo a civiles, sino exclusivamente a objetivos policiales o militares y selectivamente a líderes locales del FSLN.

Desde 2011, tres importantes crímenes masivos han sido cometidos contra civiles en el país. Uno en El Carrizo, ejecutado después de las elecciones nacionales, por líderes locales del FSLN y policías contra una familia opositora, los Pérez Mejía, con el resultado de tres muertos y dos heridos. Posterior a las elecciones municipales de 2012, dos ciudadanos que participaban de una protesta opositora en Ciudad Darío, fueron asesinados uno a balazos y otro a golpes, por activistas del FSLN en Ciudad Darío. En el primer caso, algunos de los hechos fueron detenidos y pro-



El Flaco.

cesados, aunque ya circulan libremente. En el segundo, no hubo ningún tipo de investigación policial. Ambos crímenes tienen su origen en la intolerancia política.

En lo que va del presente año, se han registrado dos crímenes masivos. Uno en el municipio de San José de Bocay, departamento de Jinotega, en enero, siendo asesinados dos niños y dos adolescentes de una misma familia. En este caso, se habló de venganzas por rencillas personales. El segundo ocurrió en marzo, una comunidad del municipio El Tortuguero en la RAAN, resultando muertos un padre y cuatro de sus hijos, habiendo sido robados previamente. El PLC informó que uno de los asesinados era líder de ese partido en la comunidad y que había sido torturado. La Policía afirmó que los ejecutores pertenecen a la banda delincuenciales conocida como “Walpapina” y que parecía ser un conflicto por asunto de tierras. No hay capturados, ni procesados por estos delitos que no parecieran ser de origen político.

Los ataques criminales contra los simpatizantes oficialistas, el 19 de julio, han mostrado unos grupos que actúan con planificación y coordinadamente, que poseen información, armas de guerra y capacidad operativa. La Fiscalía acusan a los primeros tres detenidos de filiación sandinista, les asignó un papel de retrasar la caravana, distraer su aten-

ción y de suministrar información para facilitar la acción de los armados en Puertas Viejas. Ellos, de acuerdo a la Fiscalía, estaban a cargo de tirar piedras a la caravana de sus correligionarios, acción para la cual habían sido contratados por una persona desconocida con quien se encontraron en Tipitapa.

Por otra parte, el hecho de realizar un ametrallamiento en la carretera panamericana define que uno de los objetivos del grupo armado era hacer suficientemente visible su acción. Y no realizar ningún robo o asalto, habla mucho de que sus motivaciones son de otra naturaleza. El ataque no se realizó contra un autobús de pasajeros, sino contra un vehículo que transportaba simpatizantes sandinistas.

En todo caso, no pareciera que los responsables sean grupos armados con motivaciones políticas, ni simples delincuentes, ni bandas delincuenciales comunes y corrientes. Esa manera de operar, ametrallamiento a civiles, contratación de personas, pareciera más bien característica del crimen organizado vinculado al narcotráfico. La investigación policial en curso deberá despejar las dudas sobre la identidad y el móvil de los grupos responsables de esos actos criminales.

Más allá de hacia dónde conduzcan las investigaciones policiales, todos los sectores políticos y sociales, incluidas las iglesias, están consignando la nece-

sidad de que el gobierno reconozca la existencia de grupos armados con motivaciones políticas y en lugar de responder con una guerra solapada, pueda apuntar a solventar los problemas políticos, económicos y sociales, que están originando que pobladores de áreas rurales se integren a esos grupos. Se trata de detener la violación a los derechos políticos, de organización y movilización de la ciudadanía, el hostigamiento y la violencia de diverso tipo que ejercen organismos y líderes oficialistas, la discriminación por parte de los funcionarios institucionales y policiales y las acciones de represión y restricción a la libertad personal que sufren muchas comunidades rurales con motivo de los operativos del Ejército.

Los propios obispos de la Conferencia Episcopal han insistido en la necesidad de desplegar otro tipo de acciones, no militares, para acabar con todo tipo de violencia en las zonas campesinas de Nicaragua. Hasta ahora, el gobierno no ha respondido a estos llamados.

La efectividad policial cuestionada

Frente a los crímenes de Puertas Viejas y de San Ramón, existe una demanda de la ciudadanía para que se encuentren los culpables y se haga justicia a las víctimas y a sus familiares. Pero también existe la preocupación sobre el proceder de las fuerzas policiales.

A la Policía se le reclama profesionalismo y respeto a los derechos humanos, para que en lugar de buscar chivos expiatorios, encuentre a quienes perpetraron los crímenes. Se demanda de las fuerzas policiales que actúen apegadas a la ley. Al momento de cerrar la edición de este boletín, solamente una parte de los detenidos había sido pasado a la orden de un juez, mucho después de cumplido el plazo de ley. Otros habían sido liberados y tres más permanecían detenidos por las fuerzas policiales. Durante todas las investigaciones, la Policía no brindó información a sus familiares, ni a la ciudadanía. Los abogados defensores y las organizaciones de derechos humanos no habían podido tener contacto alguno con los deteni-



Imágenes de joven asesinada en ataque a bus el pasado 19 de julio. // Foto: Carlos Herrera / Confidencial.

dos. A eso se agregan las acusaciones de haber ejercido injustificada violencia en el allanamiento y captura de los investigados.

La efectividad y profesionalismo de la Policía ha estado siendo severamente cuestionada por su alineamiento con el Frente Sandinista; por facilitar, con su actuación o la falta de ella, el que se cometan delitos y se ejerza violencia con total impunidad por parte de los conocidos y públicos grupos de choque del gobierno. Entre otras denuncias, la Policía no ha atendido la de los ataques y el asalto a jóvenes de OcupaINSS, la agresión ejecutada por motorizados oficialistas contra las mujeres que protestaban frente al Consejo Supremo Electoral y contra dos periodistas de canal 12 que cubrían la noticia, para mencionar la más reciente de esas acciones represivas.

Los crímenes ejecutados el 19, han sembrado nuevas dudas sobre la actuación policial, ahora sobre su verdadera capacidad para garantizar la seguridad pública. Para asegurar la movilización de sus simpatizantes, el gobierno utilizó cuantiosos recursos de todo tipo, incluyendo la concentración y movilización

de todas las fuerzas policiales disponibles. La Policía fue orientada a resguardar la actividad y el desplazamiento de las caravanas que llegarían a Managua procedentes de distintos departamentos del país. Pero parece que ni la inteligencia policial, ni la inteligencia militar tuvieron información alguna de los movimientos de los grupos armados que realizaron los dos ataques. El hecho evidente es que no tomaron las previsiones adecuadas o las consideraron innecesarias, para garantizar la seguridad de las personas que se movilizaban.

La circunstancia que, al menos uno, de los ataques a civiles haya sido ejecutado a escasos 75 kilómetros de Managua y 55 de Matagalpa, es objeto de preocupación adicional, pues se supone que las fuerzas policiales tienen mayor capacidad operativa en las cercanías de los grandes centros urbanos. Si los crímenes del Tortuguero y San José de Bocay han puesto en evidencia la fragilidad y poca eficiencia policial en el área rural, los de Puertas Viejas y San Ramón han puesto de manifiesto agujeros importantes en la información de inteligencia y la capacidad operativa

de respuesta de las fuerzas oficiales y militares.

Hasta ahora, la Policía solamente ha capturado a personas presuntamente vinculadas como colaboradoras con el grupo armado que realizó el ametrallamiento de civiles en Puertas Viejas. Sobre el ataque a la caravana de San Ramón, no se conoce nada.

Ortega en su mensaje, durante el acto litúrgico para las víctimas, se afanó en ratificar que Nicaragua seguía siendo un país seguro, uno de los países con más bajo índice de asesinatos y de violencia en el mundo. Esta es, sin duda, una imagen que el gobierno pretende seguir cultivando, colocándola en contraste con lo que sucede en otros países centroamericanos asolados por la violencia de las maras, el narcotráfico y otras variantes del crimen organizado.

Para el pueblo nicaragüense es relevante determinar la identidad de los criminales y sus motivaciones, pues la oscuridad sobre ello solamente abonará a elevar una sensación de inseguridad en el país. Es igualmente importante tener la certeza de que el aparato policial puede restablecer su profesionalismo, su capacidad operativa y su vocación de

servicio a todos los nicaragüenses sin distinción alguna y no menos importante, que pueda restablecer su lesionada credibilidad.

Justicia o revancha

En su discurso del 19 de julio y en el acto en homenaje a las víctimas, Ortega habló de su ánimo de paz. El criterio generalizado entre quienes no son progobiernistas es que ese es un discurso coartada realizado para mantener el doble estándar dominante, entre la realidad y la verborrea oficialista. Se trata de elaboraciones demagógicas para encubrir el ánimo represivo que ha caracterizado al régimen cada vez que movimientos sociales o políticos protestan por cualquier razón en el país, como sucedió recientemente con un grupo de mujeres que fueron reprimidas frente al Consejo Supremo Electoral.

La denuncia presentada por el gobierno en la OEA sobre los hechos criminales del 19 de julio tiene como objetivo mostrar el rostro de víctima del oficialismo. Ha sido justamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en donde el gobierno de Ortega ha sido, repetidas veces, acusado por múltiples violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos de los nicaragüenses.

Son del dominio público las acciones de intolerancia política, marginación y acoso a que están sometidas todas aquellas personas, familias e incluso comunidades reconocidas por ser opositoras o independientes. Los CPC, ahora llamados Gabinetes de la Familia, los secretarios políticos locales, los funcionarios institucionales y municipales, e incluso la propia Policía, son instrumentos de la represión oficial, que se realiza de las más variadas formas. Es sabido que ese es un comportamiento nacional, no una excepción en la conducta de las estructuras del partido oficialista. Es también, de sobra conocido, que el gobierno mantiene y financia grupos de choque, ahora motorizados, que actúan con la complacencia policial para reprimir cualquier tipo de acto de oposición política o social que no sea del agrado de la familia gobernante.

Es justificada, entonces, la preocupación en las comunidades y entre



Audiencia preliminar en la que se aceptó la acusación en contra de tres detenidos en caso de la masacre del pasado 19 de julio. // Foto: Carlos Herrera / Confidencial.



Imágenes de cortesía de uno de los buses atacados en 19 de julio.

la oposición de que la búsqueda de los responsables del crimen pueda desatar una cacería de brujas de naturaleza política por parte de agentes del gobierno y que lleven a una militarización de amplias zonas del país, en las que consideran que poseen una correlación política desventajosa.

El hecho que algunos detenidos de Ciudad Darío hayan sido señalados por dos civiles encapuchados que acompañaban a las fuerzas policiales, habla de la posibilidad de que se abran a las puertas a acciones de revancha política, si las explicaciones e investigaciones de la Policía se tornan insuficientes o poco

convincientes. Hay dentro del oficialismo quienes prefieren explicaciones simplistas y de ánimo polarizado, que los puede impulsar a tratar de saldar cuentas con la oposición política, aunque esta carezca de responsabilidad alguna, práctica que puede servirle de careador al FSLN para cohesionar sus propias fuerzas y tratar de aplacar la creciente irritación en un sector del oficialismo.

El mensaje de paz y no revancha de Ortega no es creíble, pues mientras ha tratado de mantener esa imagen, ha sembrado con sus acciones y la impunidad con que actúan sus grupos de choque, las semillas del odio, la polarización y la intolerancia política en el país.

Actualmente, el gobierno tiene el desafío de cambiar su conducta, restablecer plenamente las garantías para el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades públicas a todos los nicaragüenses, sin excepción alguna. También tiene el desafío y la oportunidad de disminuir y erradicar el ambiente de intolerancia política, autoritarismo y discriminación, inherente a la manera como han gobernado el país. Este es el mensaje que han estado repitiendo todos y cada una de las fuerzas, organizaciones y sectores que se han pronunciado lamentando y condenando los actos criminales cometidos el 19 de julio.